

IGF SPAIN 2011

¿TENEMOS DERECHO A SALIR DE INTERNET?

Conclusiones

Si alguna conclusión puede ser extraída de la sesión sobre “derecho al olvido”, es que estamos ante una realidad que requiere de una respuesta urgente por parte de todos los actores que participan en la gobernanza de Internet. Cada vez son más los ciudadanos que acuden ante instituciones como la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar que determinada información que les concierne sea retirada de Internet, o al menos no sea indexada por los motores de búsqueda. Solicitudes que, por el momento, se atienden con las herramientas disponibles en nuestro ordenamiento, a menudo diseñadas antes del surgimiento de Internet.

En aquellos casos en los que es el propio ciudadano quien cuelga sus datos en la Red, la respuesta parece clara: los prestadores de servicios que almacenan dicha información deben eliminarla tan pronto como así se lo solicite el afectado. Sin embargo, esta respuesta no parece tan evidente cuando hablamos de información colgada por terceros, en especial cuando entran en juego otros derechos fundamentales.

El factor clave para poder hablar de “derecho al olvido” es la obsolescencia de la información. Contenidos que habían quedado enterrados por el paso del tiempo emergen ahora, tras haber sido colgados en Internet e indexados por unos buscadores cada vez más potentes. Y en ciertos casos, estigmatizan a los ciudadanos a los que se refieren. Especialmente gráfica fue la comparación planteada por Ofelia Tejerina, equiparando la permanencia de la información personal colgada en la Red a la de un tatuaje.

Fruto de las discusiones, se vinieron a identificar dos facetas esenciales de este incipiente derecho. Una de ellas reactiva, configurada en torno a las peticiones de aquellos ciudadanos que deseen que determinados datos dejen de estar disponibles en Internet. La otra, y si cabe más importante, puesto que permitiría atajar el problema desde su origen, proactiva, orientada directamente a evitar que cierta información sea colgada o indexada. Trabajar de cara a la concienciación de los ciudadanos y a la autorregulación de prestadores de servicios y medios de comunicación se antoja vital, en este sentido.

Los propios medios, tras haber subido sus hemerotecas a la Red, se han convertido en uno de los actores principales en este debate. El indudable interés histórico que suscita la presencia online de sus ingentes archivos se ve matizado por la variada casuística a la que se enfrentan: desde la persona que aspira a que determinado hecho, veraz y noticiable, desaparezca; hasta aquella que sufre las repercusiones de una noticia errónea, incompleta o fragmentada que resurge con fuerza en los resultados de los motores de búsqueda. La ponderación de intereses y derechos se convierte, en estos casos, en un ejercicio éticamente ineludible, pero difícil de llevar a cabo en la práctica.

La influencia de empresas como Google en aquellos casos en los que un ciudadano se enfrenta a una “muerte civil” de facto como consecuencia de los resultados que sobre ella devuelven los motores de búsqueda se antoja, igualmente, evidente. Pero no debe olvidarse su condición de intermediarios, con lo que desde un punto de vista jurídico la situación es significativamente más compleja. En todo caso, de lo que no cabe duda es que el responsable último de que determinada información sea captada por las arañas de los buscadores es quien la mantiene colgada en sus servidores, y lo hace sin poner en práctica los estándares de no indexación desarrollados por la industria.

Llegados a este punto, cumple encontrar soluciones prácticas a este problema, algo harto complicado dados los intereses en juego, la colisión con otros derechos (fundamentalmente, las libertades de información y expresión), los conflictos jurisdiccionales propios de una Internet global y

las repercusiones económicas y organizativas que el sancionar este derecho acarrearía. Soluciones que, sin duda, deben ser buscadas en el ámbito jurídico. Pero que deben pasar irremediable y necesariamente por una mejora de las herramientas técnicas existentes para evitar la indexación de contenidos, que han de desarrollarse y flexibilizarse para permitir que repercutan únicamente sobre aquellos datos personales cuya repercusión se desea limitar, sin perjudicar la accesibilidad del resto de contenidos presentes en una página o documento determinados.

Concluimos con una frase lapidaria, pronunciada desde la platea por la abogada Paloma Llaneza: en una sociedad democrática, carece de sentido que mientras que los antecedentes penales se cancelan con el paso del tiempo, los ciudadanos deban sufrir a perpetuidad la presencia de datos personales que les perjudiquen en Internet.

Participantes en la sesión

Moderador: **Eneko Delgado Valle.** Abogado, Socio. Audens.

Ponentes: **Rafael García Gozalo.** Vocal asesor y coordinador del departamento internacional. Agencia Española de Protección de Datos.

Ofelia Tejerina. Secretaria general, abogada y defensora del internauta. Asociación de Internautas.

Milagros Pérez Oliva. Periodista y defensora del lector. El País.

María González Ordóñez. Asesora jurídica. Google.